CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
15 JUN. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 14:29 h.

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 557, 879, 881, 1128, 1197, 1215, 1397 Y 1736/2021-CR, LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROMUEVE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET LIBRE

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
Periodo Anual de Sesiones 2021 – 2022

Señora Presidenta:

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, las siguientes iniciativas legislativas:

1. Proyecto de Ley **557/2020-CR**, Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto.
2. Proyecto de Ley **879/2020-CR,** propone reforma constitucional que garantiza el derecho de acceso a internet.
3. Proyecto de Ley **881/2021-CR**, reforma constitucional que reconoce el derecho al acceso a internet como derecho fundamental.
4. Proyecto de Ley **1128/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de adecuado acceso al internet como derecho fundamental.
5. Proyecto de Ley **1197/2021-CR**, Ley de reforma constitucional del artículo 2, que incorpora el acceso a internet como derecho fundamental y promueve el acceso universal.
6. Proyecto de Ley **1215/2021-CR,** Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho al internet como derecho fundamental.
7. Proyecto de Ley **1397/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el acceso a internet como derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno.
8. Proyecto de Ley **1736/2021-CR**, Ley que reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental en la Constitución.

El presente dictamen fue aprobado por MAYORÍA en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 07 de junio de 2022, con 13 votos a favor de los congresistas AGUINAGA RECUENCO, Alejandro; BALCÁZAR ZELADA, José; CAVERO ALVA, Alejandro; CERRÓN ROJAS, Waldemar; CUTIPA CCAMA, Víctor; ECHAÍZ DE NUÑEZ ÍZAGA, Gladys; ELÍAS ÁVALOS, José; JUÁREZ GALLEGOS, Carmen Patricia; MORANTE FIGARI, Jorge; MOYANO DELGADO, Martha; QUITO SARMIENTO, Bernardo Jaime; REYMUNDO MERCADO, Edgard; SALHUANA CAVIDES, Eduardo y SOTO PALACIOS, Wilson.

Votó en contra la congresista TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana.

Se abstuvo el congresista MUÑANTE BARRIOS, Alejandro.

I. SITUACIÓN PROCESAL

1. Proyecto de Ley **557/2020-CR,** Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto, que desarchiva el Proyecto de Ley 3607/2018-CR, presentado por el entonces congresista, Alberto de Belaunde de Cárdenas. Ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 26 de octubre de 2021, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el 03 de noviembre de 2021, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

2. Proyecto de Ley **879/2020-CR,** propone una reforma constitucional que garantiza el derecho de acceso a internet, fue presentado el grupo parlamentario "Alianza para el Progreso", a iniciativa de la congresista Elva Edith Julón Irigoin, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 01 de diciembre de 2021, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el 06 de diciembre de 2021, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

3. El Proyecto de Ley **881/2021-CR**, reforma constitucional que reconoce el derecho al acceso a internet como derecho fundamental, fue presentado el grupo parlamentario "Alianza para el Progreso", a iniciativa del congresista Alejandro Soto Reyes, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 02 de diciembre de 2021, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el 06 de diciembre de 2021, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

4. El Proyecto de Ley **1128/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de adecuado acceso al internet como derecho fundamental, fue presentado el grupo parlamentario "Fuerza Popular", a iniciativa de la congresista Auristela Ana Obando Morgan, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 12 de enero de 2022, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el 14 de enero de 2022, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

5. El Proyecto de Ley **1197/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho al internet como derecho fundamental, fue presentado el grupo parlamentario "Perú Democrático", a iniciativa de la congresista Betssy Betzabet Chávez Chino, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 24 de enero de 2022, e ingresó a la Comisión de Constitución y

Reglamento, el 28 de enero de 2022, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

6. El Proyecto de Ley **1215/72021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho al internet como derecho fundamental, fue presentado el grupo parlamentario "Juntos por el Perú", a iniciativa de la congresista Ruth Luque Ibarra, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 31 de enero de 2022, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el 01 de febrero de 2022, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

7. El Proyecto de Ley **1397/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el acceso a internet como derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno, fue presentado por el grupo parlamentario "Perú Democrático", a iniciativa del congresista Luis Roberto Kamiche Morante, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 02 de marzo de 2022, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, a el 04 de marzo de 2022, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

8. El Proyecto de Ley **1736/2021-CR**, Ley que reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental en la Constitución Política, fue presentado por el grupo parlamentario "Perú Libre", a iniciativa de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 13 de abril de 2022, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el 26 de abril de 2022, como única comisión dictaminadora, para su estudio y dictamen.

Todas las propuestas legislativas, bajo diferentes mecanismos, buscan resolver el mismo problema advertido en su exposición de motivos, por lo cual se ha tenido por conveniente acumularlos.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Tal como se muestra en el Cuadro 1 a continuación, en los períodos parlamentarios del año 2001 hasta el 2021, se han presentado varias iniciativas circunscritas principalmente a un acceso al internet, denominado en cierta época "universalización" y "acceso a internet":

Cuadro 1
Antecedentes legislativos sobre la universalización y acceso del internet
Período 2001-2021

PROYECTO DE LEY	TÍTULO	SUMILLA	ÚLTIMO ESTADO
06332/2002-CR	Ley para el acceso y universalización de Internet.	Propone declarar de interés público, el acceso y el uso de Internet para lo cual se desarrolla políticas que promuevan su uso para el desarrollo cultural, económico, social y político.	Archivo
04662/2010-CR	Ley que promueve internet para todos.	Propone reconocer que el acceso a internet es una herramienta para luchar contra la exclusión, que coadyuva al ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión, así como para contribuir con el desarrollo económico y social del país.	Archivo
04434/2010-CR	Ley que declara como derecho fundamental el acceso de la banda ancha.	Propone declarar derecho fundamental el acceso a la banda ancha para todo peruano residente en el territorio nacional.	Archivo
04392/2010-CR	Ley que declara de necesidad pública la Banda Ancha de Internet.	Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la Banda Ancha de Internet.	Archivo
04255/2010-PE	Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la masificación de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha.	Propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la masificación de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y modificar el artículo 2° de la Ley núm. 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al sector Transportes y Comunicaciones.	Archivo
02294/2012-CR	Ley que incorpora como Derecho Constitucional el acceso al Internet de Banda Ancha.	Propone incorporar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, referente al acceso al internet de banda ancha.	Archivo
00999/2011-CR	Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional	Ley de promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de fibra óptica.	Publicado Ley N° 29904

00688/2011-CR	Ley de Promoción de la Banda Ancha.	Ley de Promoción de la Banda Ancha.	Publicado Ley Nº 29904
02780/2017-CR	Ley que declara el acceso a internet como un derecho humano.	Propone la Ley que declara el acceso a internet como un derecho humano.	Archivo
3156/2018-CR	Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental progresivo en la Constitución Política del Perú.	Reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental progresivo en la constitución política del Perú.	11/03/2021 Aprobado 1ra. votación - no se llevó a cabo la segunda votación.
3607/2018-CR	Ley de Reforma Constitucional que garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto.	Propone modificar el inciso 4 del artículo 2 y el artículo 14 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto.	Actualizado, Proyecto de Ley 557/2021-CR
5600/2020-CR	Ley que reconoce el derecho de acceso a internet para garantizar una educación y alfabetización accesible para todas las peruanas y peruanos.	Propone una ley especializada en reconocer el derecho de acceso a internet.	11/03/2021 Aprobado 1ra. votación – no se llevó a cabo la segunda votación.
5843/2020-CR	Ley que reconoce el derecho a acceso a internet como derecho constitucional.	Incorpora al numeral 4 artículo 2 de la Constitución Política que el Estado garantiza el acceso al internet y las tecnologías de la información y comunicación, priorizando su cobertura en el sector rural.	11/03/2021 Aprobado 1ra. votación – no se llevó a cabo la segunda votación.

Fuente: Página web del Congreso de la República
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2021-2022

2.1 Opiniones solicitadas

La Comisión de Constitución y Reglamento cursó oficios a fin de conocer las opiniones de especialistas y de la sociedad civil organizada, para que presentaran sus opiniones por escrito sobre los temas en análisis.

A continuación, se muestran los detalles de los pedidos de opinión solicitados:

Cuadro 2
Opiniones solicitadas

OFICIO N.°	PROYECTO	ENTIDAD	NOMBRE	FECHA DE ENVÍO
505-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Hiperderecho	Pedro Muñoz del Río	10/12/2021
504-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Especialista en Derecho Constitucional	Roger Rodríguez Santander	10/12/2021
503-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Sociedad de Comercio Exterior del Perú	Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos	10/12/2021
502-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Especialista en Ingeniería Electrónica	Carlos Valdez Velásquez López	10/12/2021
501-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Red Científica Peruana	Rolando Toledo Vega	10/12/2021
500-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital	Marushka Chocobar Reyes	10/12/2021
499-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Especialista en Gobierno Digital	Erick Iriarte Ahon	10/10/2021
498-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Especialista en Gobierno Digital	Elaine Ford Deza	10/10/2021
497-2021-2022-CCR/CR	557,879 y 881	Ministro de Transportes	Juan Silva Villegas	10/12/2021

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2021-2022

2.2 Opiniones recibidas

A la fecha de elaboración del presente dictamen se recibieron las siguientes respuestas:

- **La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU)**, mediante Carta N°367-2021/GG/COMEXPERU, de fecha 22 de noviembre de 2021, remite opinión favorable sobre los Proyectos de Ley 557/2021CR, 879/2021CR y 881/2021-CR, suscrito por su Gerente General, Jessica Luna Cárdenas, el cual, -en síntesis- señala lo siguiente:

- El reconocimiento del Internet como un espacio libre y abierto se dio a nivel nacional gracias a la política de Estado número 351 del Acuerdo Nacional, que reconoce que el Estado *"diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos, así como el adecuado resguardo de la seguridad de la información".*
- Garantizar el acceso al Internet es un paso primordial para reducir la brecha digital, es indispensable que tal reconocimiento se haga bajo las garantías de apertura y libertad para un disfrute adecuado y efectivo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Ello en tanto dichas dos garantías constitucionales resguardan el principio de neutralidad de la red. Así, gracias a tal principio, los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos constitucionales, como la libertad de expresión y acceso a la información en el entorno tecnológico que las redes de telecomunicaciones proveen.
- Es esencial que el Estado peruano pueda proveer seguridad jurídica, proteger la institucionalidad y generar predictibilidad en el sector a fin de dar certidumbre para planificar inversiones que requieran sumas importantes a largo plazo, evitando la posibilidad de futuras regulaciones discrecionales, nuevas disposiciones que desconozcan la naturaleza funcional del Internet, o que abran la posibilidad de atentar contra su correcto funcionamiento.

- **Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN,** mediante cartas AFIN N° 047-2022 y 048-2022, de fecha 17 de marzo de 2022, remiten opinión favorable sobre los Proyectos de Ley 557/2021-CR y 879/2021-CR, suscrito por su presidenta María Leonie Roca Voto Bernales, el cual, -en resumen- menciona lo siguiente:
  - La promoción del acceso a Internet es una necesidad imperiosa que debe formar parte esencial de las políticas del Estado, y es que la actual masificación de las conexiones de banda ancha genera una serie de incuestionables beneficios económicos y sociales a los ciudadanos.
  - El Estado peruano garantiza que determinados derechos fundamentales van a ser cubiertos a través del acceso a Internet como el derecho a la información. Es así que todos los peruanos tienen derecho a acceder libremente a las páginas web que estimen conveniente, sin que se limite la posibilidad de acceso, como ocurre en otras latitudes. De igual forma, garantiza la libertad de expresión, la cual se ejecuta en gran medida a través del Internet. Hoy gracias a las nuevas tecnologías todos los ciudadanos con acceso a Internet pueden ejercitar libremente este derecho a través de la publicación de blogs o páginas web,

teniendo derecho. También el derecho al trabajo puede ejercerse mediante Internet, a través del teletrabajo o con el desarrollo de las modernas técnicas del comercio electrónico. En ese sentido, el ejercicio de determinados derechos se realiza con mayor plenitud si se tiene acceso a Internet a través de un circuito de banda ancha.

- El Estado peruano, en atención al rol subsidiario del Estado reconocido constitucionalmente, viene desarrollando desde hace más de veinte años una política consistente en promover el acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas rurales. Si lo que se busca es que cada vez más peruanos accedan a internet, ello parte por revaluar aquellas imposiciones regulatorias y legales que está elevando los costos de prestación del servicio. La Ley de Velocidad Mínima Garantizada aprobada por el Congreso, la regulación de calidad de OSIPTEL que castiga la renovación del servicio y la expansión en áreas rurales son trabas reales para que el peruano que hoy con cuenta con internet pueda estar conectado. No obstante, Urge revaluar los costos que se genera por una regulación no orientada a promover conectividad.
- Se propone incorporar en el capítulo II de Derechos Sociales y Económicos la siguiente redacción:

  "Artículo 14-A Promoción de acceso a internet.
  El Estado reconoce el derecho de toda persona de acceder de forma progresiva a internet promoviendo el acceso al mismo, para lo cual establece políticas de impulso para el cierre de la brecha de conectividad y la alfabetización digital de los peruanos."

- La **Defensoría del Pueblo**, mediante el Oficio 383-2021-DP/PAD, de fecha 29 de diciembre de 2021, suscrito por la Primer Adjunta, señora Eugenia Fernán Zegarra, remite una opinión favorable de la Adjuntía en asuntos constitucionales, respecto de los Proyectos de Ley 557/2021CR, 879/2021-CR y 881/2021-CR, el cual, -en resumen- menciona lo siguiente:
  - El desarrollo y bienestar de la persona ha sido el presupuesto que ha propiciado el uso masivo de las denominadas Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), siendo cada vez más sofisticadas como lo demanda la actual sociedad de la información y del conocimiento.
  - Es indispensable que el Estado peruano adopte medidas que contribuyan a facilitar el acceso y uso de las TIC, en particular del Internet, y es que el entorno digital constituye un espacio idóneo que permite optimizar el goce de derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión e información, la educación, el acceso a la información pública, entre otros.

- De acuerdo con un informe elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 3 900 millones de personas ya usaban Internet a fines del 2018, lo que "representa un paso importante hacia una sociedad mundial de la información más integradora", y destaca un crecimiento progresivo en cuanto al acceso y uso de las TIC en el mundo.
- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) advirtió que el 93% de hogares en el país cuentan al menos con una TIC (ya sea celular, teléfono fijo, Internet o televisión por cable). Aquí también se detalló que solo el 56.2% de las personas de seis años cuentan con acceso a internet en el país, lo que supone un ligero incremento porcentual respecto de lo advertido en el tercer trimestre del 2017 (50.7%). De igual manera se observó una mayor cantidad de usuarios de internet en Lima Metropolitana (77%), en contraste con lo advertido en las demás zonas urbanas (59.9%) y en el área rural (17.9%) donde el acceso es mucho menor.
- En la teoría constitucional es claro que los derechos fundamentales vinculan a todo órgano estatal y que ello implica no solo un deber de abstenerse de injerencias que vulneren los derechos (obligación negativa) sino que implica una obligación positiva de efectuar todo aquello que sirva a la realización de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, destacaron que al entender a las libertades de expresión e información y a los demás derechos fundamentales como principios del ordenamiento jurídico, es plausible concluir que existe un mandato implícito en la Constitución de garantizar el acceso a las TIC – tecnologías de información y comunicación- y al internet en tanto permiten optimizar el goce de dichos derechos, lo cual debiera estar positivizado.
- El internet constituye un espacio idóneo para el ejercicio de diversos derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a las libertades de expresión e información. En efecto, la población encuentra en el internet una herramienta esencial para expresar y/o canalizar sus ideas, pensamientos, criticas, hechos noticiosos, así como para acceder a opiniones e información de toda índole, siendo una garantía del goce de libertades de expresión e información.
- El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a un internet abierto, democrático y plural reafirma el deber del Estado de adoptar acciones que contribuyan con este fin, y favorezcan el goce de otros derechos fundamentales y de las libertades comunicativas, por lo que la propuesta debe ser aprobada.

- **Hiperderecho**, mediante carta de fecha 17 de diciembre de 2021 suscrito por su coordinadora legal, Lourdes Lucía Pacheco, remite una opinión favorable, respecto

de los Proyectos de Ley 557/2021CR, 879/2021-CR y 881/2021-CR, el cual, -en resumen- menciona lo siguiente:

- El acceso irrestricto a Internet es condicionante para el ejercicio de otros derechos como la privacidad, la libertad de reunión, entre otros; y también permite ejercer otros tantos, como la educación, el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Así ha sido reconocido por los Relatores de la ONU, OEA, OSCE y CAPDH en materia de libertad de expresión, al señalar, respecto del acceso, que: *"Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres"*
- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en los Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente (2017), ha identificado la existencia de ciertos principios rectores de Internet, entre los que destacan el de su naturaleza libre y abierta. En específico, esta naturaleza se operativiza a través del principio de neutralidad de red, en virtud del cual "el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.
- La Política de Estado 35 del Acuerdo Nacional: Sociedad de la información y sociedad del conocimiento. En virtud de ella, se establece que el Estado "(i) diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos", que se tenga en cuenta que, desde un enfoque basado en derechos humanos, se deben satisfacer cuatro indicadores: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
- La brecha digital no solo se restringe a las desigualdades de acceso, sino también de uso y de capacidades, la formación en competencias digitales es sumamente relevante para el cierre de dichas brechas.
- La propuesta de fórmula legal debe estar encaminada a que el derecho de acceso a Internet sea reconocido como un inciso autónomo dentro del artículo 2 de la Constitución, en el marco del Capítulo de los Derechos Fundamentales.
- La fórmula legal debe reconocer los principios de un Internet libre y abierta, lo cual debe plantearse en el texto constitucional.
- Se prefiere el término "Internet de banda ancha" a fin de garantizar un mínimo de calidad en el servicio.

- El reconocimiento debe comprender la intersección entre el acceso a Internet y la educación, procurando que la promoción de la alfabetización digital y de la formación en tecnologías de la información y las comunicaciones sean parte de las obligaciones del Estado señaladas en la Constitución.

- El **Ministerio de Educación**, mediante Oficio 156-2022-MINEDU/DM, de fecha 10 de marzo de 2022, suscrito por el ministro Rosendo Leoncio Serna Román, remitió una opinión favorable, respecto al Proyecto de Ley 557/2021CR, el cual, -en síntesis- menciona lo siguiente:
  - Implicará que el Estado promueva el desarrollo de infraestructura tecnológica y, sobre todo de redes de comunicación, que garantice el acceso a internet para toda aquella persona que quiera hacer uso, en especial en las zonas rurales, zonas de frontera y comunidades indígenas, y se extenderá su uso en aquellas zonas de difícil acceso, para reducir las brechas de equidad y de conectividad, lo cual es concordante con la política general de gobierno en lo que respecta al sector educación.
  - Permitirá la implementación de la propuesta curricular en un ámbito mayor, pudiendo así los estudiantes desarrollar las competencias planteadas en el Currículo Nacional de la Educación Básica para responder a las demandas de la sociedad actual, dado que, en el Currículo Nacional de la Educación Básica también se releva la importancia de la formación en las tecnologías de la información y comunicación.

- El señor **Roger Rodríguez Santander**, como Secretario General del Tribunal Constitucional, mediante oficio 01-2022-SG/TC de fecha 4 de enero de 2022, se excusa de emitir opinión dado que el Tribunal Constitucional carece de competencias consultivas, pues ello podría afectar en el futuro el ejercicio independiente e imparcial de sus competencias jurisdiccionales, en particular, en el ámbito de los procesos de inconstitucionalidad que puedan interponerse contra las normas con rango de ley.

- El **Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social**, mediante Oficio N° D001020-2021-MIDIS-DM, de fecha 30 de diciembre de 2021, suscrito por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, remite una opinión que señala que el Proyecto de Ley 881/2021CR no contempla asuntos de competencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

De igual forma, se encontró en el archivo de la Comisión las siguientes respuestas de opinión relevantes:

- El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**, mediante oficio 779-2019-JUS/SG, de fecha 20 de febrero de 2019, adjuntó el Informe 429-2018-JUS/DGDNCR, de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, que afirma que es viable el proyecto 3607, destacando que es posible que el legislador incorpore un derecho referido al acceso de nuevas tecnologías, y en particular al internet, en el texto constitucional. Asimismo, también es posible incorporar en la Constitución el reconocimiento expreso de los deberes de promover el acceso al internet y la formación en nuevas tecnologías. Adicionalmente, recomienda reevaluar el incorporar dicho contenido en el artículo 2 inciso 4 de la Constitución, porque solo se refiere a libertades informativas, y el sustento es más amplio.

  En el sustento inciden en que las tecnologías de la información han generado un cambio social, económico y político que redimensiona el ámbito de acción del Estado y de los particulares, además de suponer un nuevo flanco que, si no es atendido, puede suponer la vulneración de determinados derechos fundamentales. Así, mencionan que la constatación de una nueva realidad, vinculada con el ejercicio de otros derechos, y por ello con la dignidad del ser humano, supone una posición del sujeto frente al Estado, que debe ser tutelada. Por ello, señala que existen suficientes elementos de juicio para afirmar que el acceso a internet puede constituirse en un nuevo derecho fundamental.

  Dejan señalado, no obstante, que dicho reconocimiento no es pacífico, ya que hay posturas que destacan que el acceso a internet no puede ser un derecho fundamental en sí mismo, sino como un facilitador de derechos. Sin embargo, se cita que a nivel comparado ha habido reconocimientos de derecho fundamental (México en su Constitución, Francia y Costa Rica vía jurisprudencia). Hay quienes señalan, además, que en el Perú ya estaría reconocido por la Ley de banda ancha, Ley 29904.

- El **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, mediante el oficio 136-2019-MTC/01 de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito por el entonces ministro, **Edmer Trujillo Mori**, remite opinión institucional del Proyecto de Ley 3607, mediante el informe 4029-2018-MTC/08 de la Oficina general de asesoría jurídica. Señalan brevemente que, tal como se señaló anteriormente con ocasión del Proyecto de Ley

2780/2017-CR, el Ministerio carece de competencia para pronunciarse sobre la determinación de derechos constitucionales o derechos humanos.

Posteriormente, ante una nueva consulta de opinión institucional, el en ese entonces ministro, **Ing. Carlos Estremadoyro Mory**, respondió mediante el Oficio 134-2020-MTC del 18 de setiembre de 2020, adjuntando el Informe 1253-2020/MTC.08 de la Oficina General de Asesoría Jurídica del citado ministerio, que cuenta a su vez con la opinión de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones. En su análisis se refieren a los tres proyectos consultados, y enfatizan que el citado ministerio no tiene competencia para opinar respecto de la declaración del acceso a internet como un derecho fundamental o derecho humano, propuesto en los proyectos 3156 y 5600. Por ello, las conclusiones sobre ambos proyectos se circunscriben a la falta de competencia y asimismo a observar la parte en la que se circunscriben especialmente a restringir el servicio de internet para fines de cultura y alfabetización.

En cuanto al proyecto 3607, opinan por la viabilidad de dicha iniciativa en tanto tiene como idea central garantizar el servicio de internet de manera libre y abierta, lo que -señalan-, en principio, constituye la regla general en la normativa del sector, pero advierten que no se puede dejar de mencionar que existen algunas normas de restricciones al acceso a internet, bajo ciertos supuestos regulados, como lo establecido en el Reglamento de neutralidad de red, que dispone por ejemplo el filtro o bloqueo de servicios o aplicaciones en cumplimiento de obligaciones contractuales con el Estado con motivo de una norma específica.

- El especialista en Derecho y Tecnologías de la Información, **Miguel Morachimo**, mediante carta de fecha 15 de julio de 2020 compartió su opinión especializada respecto del proyecto 5600/2020-CR, señalando principalmente que está de acuerdo con el establecimiento de un derecho de acceso al internet, reconocido mediante una reforma constitucional, y tras ello, una ley de desarrollo.

  Enfatizó que actualmente no existe una decisión jurisdiccional que establezca el reconocimiento del derecho de acceso a Internet como derecho fundamental, y que para la existencia de un derecho implícito se requiere su reconocimiento a nivel jurisdiccional o a través de una reforma constitucional. Recordó que no contamos con normas internacionales que reconozcan este derecho y amplíen el catálogo de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, pues a lo sumo se cuenta con normas de *soft law* que recalcan la importancia que tiene Internet para

el ejercicio de múltiples derechos humanos, haciendo hincapié en la libertad de expresión, pero "no existe resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas, tratado internacional o enmienda a tratado alguno que reconozca el carácter de derecho humano del acceso a Internet ".

Asimismo, recomendó que para la norma de desarrollo debiera haber una redacción clara de las obligaciones que se generan para el Estado ante el reconocimiento de dicho derecho. En ese sentido, enfatizó que en el proyecto revisado se dispone priorizar la conexión a Internet de las instituciones educativas del Estado y, dentro de esas, las que se encuentren en zonas de difícil acceso; posición con la que coincide ya que la brecha digital se acentúa en las zonas rurales. Sobre la misma norma de desarrollo recomendó, asimismo, que la alfabetización digital sea más que la priorización de conexión en determinadas zonas del Perú. Y, finalmente, señaló considerar disposiciones de protección del uso adecuado de los datos en este contexto.

III. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

A continuación, se resume el contenido principal de los proyectos de ley que originan el presente dictamen:

a. **Proyecto de Ley 557/2020-CR**, Ley de reforma constitucional que garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto. Menciona en su exposición de motivos que es necesario superar la brecha digital y aspirar a una verdadera inclusión de todos los ciudadanos en una sociedad de la información, exigiendo una adecuada regularización que contenga tres dimensiones principales del internet: a) acceso a internet; b) el derecho de acceso a un servicio de internet y a sus contenidos; y c) la formación que permite el desarrollo de las capacidades necesarias para gestionar satisfactoriamente la información y la comunicación a la que tiene acceso mediante internet, y mejorar así el ejercicio de los derechos y la calidad de vida.

   En ese sentido, propone una modificación al artículo 2 de la Constitución Política, incorporando la premisa que el Estado garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto. De igual manera, modifica el artículo 14 de la Constitución Política, señalando que el Estado promueve el acceso a internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.

b. **Proyecto de Ley 879/2020-CR**, propone una reforma constitucional que garantice el derecho de acceso a internet. La iniciativa examinada tiene por objetivo modificar los artículos 2 y 14 de la Constitución Política de Perú, con el fin de garantizar el derecho de acceso a internet, así como promover su acceso y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.

La propuesta se fundamenta en el desarrollo que ha tenido el internet durante todo este tiempo, permitiendo que se tenga acceso a cualquier información de manera instantánea, que la gente se comunique independientemente de donde viva, así como a facilitado las tareas educativas y burocráticas para hacerlas más accesibles a cualquiera. Asimismo, enumera una serie de usos que tiene el internet en beneficio de la población, tales como: buscar información, comunicación inmediata, contacto social, investigación, educación, ocio, transacciones financieras y comerciales.

Propone que la regulación en la constitución debe contener tres dimensiones: a) derecho de acceso a un servicio de internet y a sus contenidos; b) la formación que permita el desarrollo de las capacidades necesarias para gestionar satisfactoriamente la información y la comunicación a la que se tiene acceso mediante internet; y c) mejorar el ejercicio de los derechos y la calidad de vida de las personas.

Adicionalmente, cabe mencionar que, en la Décima Sesión Extraordinaria, de fecha 6 de mayo de 2022, la **Congresista Elva Julón Irigoín**, autora de la iniciativa legislativa examinada, señaló los siguientes fundamentos que motivaron la presentación del proyecto de ley:

- El internet es un derecho fundamental de la persona para su desarrollo en la sociedad, fortaleciendo otros derechos existentes, tales como el derecho a la información, comunicación, educación, libertad de expresión.
- En los lugares más alejados no se cuenta con internet, demostrando una brecha digital existente que debe ser reducido con una intervención del Estado, el cual debe garantizar una universalidad en su acceso.
- El internet ha mejorado la calidad de vida de las personas, permitiendo una comunicación inmediata, contacto social, investigación, entre otras actividades que facilitan el crecimiento personal.

c. **Proyecto de Ley 881/2021-CR**, reforma constitucional que reconoce el derecho al acceso a internet como derecho fundamental. Argumenta que el listado de derechos fundamentales que abarca el artículo 2 de la Constitución Política no tiene un reconocimiento expreso del acceso a internet como derecho de la persona. Asimismo, la iniciativa legislativa examinada menciona que, en tiempos actuales, tras haber evidenciado la necesidad de tener acceso a la red mundial debido a la emergencia sanitaria, no es posible negar lo esencial que es el acceso a internet para toda la población.

La propuesta normativa señala además que si bien es cierto el artículo 3 de la Constitución Política establece que la enumeración de los derechos establecidos en su texto no excluye los que la constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, es necesario positivar el derecho al acceso al internet, para garantizar, textualmente, su desarrollo en la sociedad.

En ese sentido, la medida propuesta busca habilitar la posibilidad de concebir el acceso a Internet como servicio público y proteger a la población en caso exista amenaza o vulneración a este derecho.

En adición a lo señalado, cabe mencionar que en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaría, de fecha 10 de mayo de 2022, el **Congresista Alejandro Soto Reyes,** autor de la iniciativa legislativa examinada, señaló los siguientes fundamentos que motivaron la presentación del proyecto de ley:

- Como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, durante sus viajes a Oxapampa y Huancavelica, ha recogido el clamor popular que reclama un acceso al internet y que lamentablemente no es una política de Estado que permita que llegue a todos.
- El derecho del internet no solo es un derecho individual sino también optimiza otros derechos, como la libertad de expresión, libertad de información comunicación, acceso a la información, entre otros.
- De acuerdo con una opinión de la Defensoría del Pueblo, el internet es un derecho social que le permite a los ciudadanos interactuar con sus pares, así como tener acceso a la información

- La pandemia ha demostrado, indirectamente, lo esencial que es el internet, sea en el hogar o centros educativos, así como a nivel nacional. Los porcentajes que existen de acceso al internet es limitado en el país.
- El Estado debe reconocer al internet como una necesidad básica, la legislación comparada muestra que ya se ha estado tomando esas medidas, tales como: Grecia, México, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y España.
- Solo un 47.1% de hogares del Perú tiene acceso a internet, siendo necesarios promover desde el Estado el uso masivo en todo el territorio.
- El internet debe ser reconocido como servicio público, con el fin de reducir la brecha digital y las desigualdades que se viven actualmente.

d. **Proyecto de Ley 1128/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho a un adecuado acceso al internet como derecho fundamental. La iniciativa señala que la crisis sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado de modo trasparente y doloroso las brechas de desigualdad existentes en el país, sobre todo, en campos como el de la educación. Ello en relación con el hecho que miles de niños y adolescentes no pudieron acceder a una educación virtual cierta y real, por falta de recursos económicos, pero sobre todo por falta de previsión y acción estatal en infraestructura, ya que en el territorio nacional existen grandes áreas sin acceso a electrificación ni cobertura de internet.

Bajo ese contexto, la iniciativa legislativa propone que es necesario mencionar el derecho al adecuado acceso a internet, como un aspecto primordial para el desarrollo humano, al que deben acceder naturalmente todos los peruanos, sin distinción alguna. Así, sostiene que resulta imprescindible que todo estudiante cuente con las herramientas básicas para enfrentar la nueva realidad postcovid y que ninguno frustre su futuro por tener la condición de pobreza. Asimismo, se argumenta que este derecho debe alcanzar a todos los peruanos, pues la condición de estudiante es primordial, pero no exclusiva en esa mirada de diagnóstico de la realidad.

Adicionalmente, cabe mencionar que en la Décima Sesión Extraordinaria, de fecha 6 de mayo de 2022, la **Congresista Auristela Obando Morgan**, autora de la iniciativa legislativa examinada, señaló los siguientes fundamentos que motivaron la presentación del proyecto de ley:

- La pandemia de la COVID-19 reflejó que la brecha digital en el Perú es muy amplia, demostrando las desigualdades de acceso a internet existentes en los diferentes estratos sociales y diferentes partes del país. Sobre ello, y según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el año 2020 a través de cualquier modalidad se redujo cinco puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019, al pasar de 92% a 87%. Esto significó que más de cuatrocientos mil alumnos dejaron de plano de llevar clases durante el año 2020, a raíz de la pandemia. El mayor descenso ocurrido fue en el nivel de educación inicial, en el que la proporción de niños que recibieron clases cayó de 93% a 81%.
- La propuesta busca garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional, con el fin de proteger la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria de los niños y jóvenes, y que nunca más vuelva a pasar una desprotección al derecho a la educación, tal como se vivió durante la pandemia de la COVID-19.
- La propuesta fortalece la libertad de expresión y difusión del pensamiento, en razón de que el internet permite acceder a todo tipo de información y espacios de dialogo o debate público sobre materias de interés general, siendo una vía alterna a los medios de comunicación tradicional como la televisión, radio o escrito, que son dirigidos por el sector privado o público, permitiendo que un individuo pueda manifestar su propia posición en la web, sin necesidad de incurrir en altos gastos, como sí tendría que asumirlo si lo hace por medios de comunicación tradicional.
- De igual manera, el derecho al internet fortalece el derecho al trabajo, potenciando el uso del trabajo remoto, el cual fue usado de manera provisional durante la pandemia, pero ha demostrado ser una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto en virtud de que los ciudadanos no afrontarían problemas que aquejan nuestras ciudades.
- Por último, el internet en los últimos años ha tomado mucha importancia para el desarrollo de las personas en las sociedades modernas, siendo una herramienta tecnológica que interconecta a nivel mundial al individuo y que trae, como consecuencia, una comunicación en tiempo real entre las personas, un intercambio de bienes y servicios online, acceso a información disponible en la web, educación virtual, uso de

dinero virtual, entre otras situaciones que facilitan, drásticamente, la vida del individuo en la sociedad y el mundo.

e. **Proyecto de Ley 1197/2021-CR**, Ley de reforma constitucional del artículo 2, que incorpora el acceso a internet como derecho fundamental y promueve su acceso universal. Tiene por objeto que el derecho al acceso al internet sea considerado un derecho fundamental dentro de la Constitución Política del Perú, ello como producto de varios factores como la globalización, el avance de la ciencia y la tecnología, entre otros. Señala la exposición de motivos que el impacto de esta reforma constitucional es positivo en la medida que diversos derechos fundamentales constitucionalmente protegidos se ven potenciados para un correcto y mayor goce de estos. Tal es el caso del derecho a la información, la libertad de expresión, y al derecho al trabajo. Por otro lado, explica que la interacción familiar mediante WhatsApp, mensajes de texto, video llamadas u otros, ha generado una interconectividad entre las personas que debe ser resguardado por la Constitución Política.

   Además, enfatizan que los beneficios son mayores a los potenciales costos que pudieran existir en relación con la implementación de la reforma constitucional, pues los efectos positivos que genera se presentan en prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, ya que amplía a la posibilidad de ejercicio de sus derechos; pero, además, retribuye en una mejora social en conjunto.

   En adición a lo señalado, cabe mencionar que en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaría, de fecha 10 de mayo de 2022, la **Congresista Betssy Betzabet Chávez Chino**, autora de la iniciativa legislativa examinada, señaló los siguientes fundamentos que motivaron la presentación del proyecto de ley:

   - El internet permite acceder a otros derechos fundamentales como derecho a la reunión, educación, salud, información, entre otros.
   - La pandemia ha demostrado lo esencial que es el internet para seguir la vida de los ciudadanos, demostrando que el internet es inclusivo.
   - De acuerdo con el derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el estado debe garantizar el acceso a internet más amplio, desarrollando medidas que reduzcan la brecha digital.
   - El artículo 6 de la Constitución Política de México ha incluido el derecho de acceso a la información, en Francia también se reconoció dicho

derecho, así como en Costa Rica, mediante una sentencia de su Sala Constitucional.

- La propuesta busca modificar la Constitución para incluir, taxativamente, el acceso al internet de forma inclusiva y universal, basándose en el derecho comparado.

f. **Proyecto de Ley 1215/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho al internet como derecho fundamental. Tiene por objeto impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competencia, la seguridad del país, y la transformación organización hacia una sociedad de información y el conocimiento.

Señala que el impacto de esta reforma constitucional es positivo por impulsar el cierre de brechas de conectividad digital en el país e incrementar el acceso de internet en todo el territorio peruano, garantizándose un internet libre y abierto, así como neutral.

g. **Proyecto de Ley 1397/2021-CR**, Ley de reforma constitucional que reconoce el acceso a internet como derecho fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. Tiene por objeto modificar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, con el fin de incorporar el acceso a internet como derecho fundamental y garantizar la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. Según datos citados en la iniciativa legislativa examinada, existe un grave déficit de acceso al internet, así como una baja velocidad en su funcionamiento; demostrando que el acceso a internet ha sido descuidado en el Perú, a pesar que en diferentes estudios, se ha constatado que existe una relación entre el incremento de acceso al internet y el crecimiento económico.

En ese sentido, la propuesta busca que el Estado promueva un internet de calidad, libre, inclusivo y abierto, con el fin de cerrar la brecha digital, en el marco de la lucha contra la desigualdad en el Perú.

En adición a lo citado, cabe mencionar que en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaría, de fecha 10 de mayo de 2022, el **Congresista Luis Kamiche**

Morante, autor de la iniciativa legislativa examinada, señaló los siguientes fundamentos que motivaron la presentación del proyecto de ley:

- Las universidades públicas necesitan internet gratuito para mejorar la educación.
- La universidad del internet debe ser garantizado por el Estado, destacando la búsqueda del equilibrio entre crecimiento y el uso del internet. Según los derechos humanos el internet es libre, permitiendo que las personas disfruten su uso.
- El acceso internet incrementa el crecimiento económico, habiendo estudios señalan que existe una relación entre ambos.

h. **Proyecto de Ley 1736/2021-CR**, Ley que reconoce el derecho de acceso a internet como derecho fundamental en la Constitución Política. Tiene por objeto la modificación del artículo 2, inciso 8 del texto constitucional, con el fin de insertar una garantía que obligue al Estado, y principalmente el Poder Ejecutivo, a garantizar el acceso al internet, priorizando su cobertura en los sectores rurales, los que tienen mayor tasa de analfabetismo y de pobreza.

El proyecto en mención recoge como fundamento el escenario de la pandemia de la COVID-19, en el cual se demostró que la zonas rurales y pobres se vieron mayormente afectados para acceder al uso del internet, afectando el derecho a la educación de muchos niños y jóvenes en el país. Añade, también, que el derecho al internet esta contemplado en la legislación nacional como internacional, siendo viable la modificación constitucional.

A continuación, se recoge en el Cuadro 3, las fórmulas de las propuestas de reforma constitucional del derecho de acceso a internet.

Cuadro 3
Cuadro comparativo- Reforma Constitucional del artículo 2, sobre el derecho de acceso a Internet[1]

1736/2021-CR	1397/2021-CR	1215/2021-CR	1197/2021-CR	881/2021-CR	879/2020-CR	557/2020-CR
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho	**Artículo 2.- Toda persona**	**Artículo 2.- Toda persona**	**Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:**	**Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:**	**Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:**	**Artículo 2.- Toda persona tiene derecho**

[1] No se coloca el texto del proyecto 1128/2021-CR, debido a que este propone modificación del artículo 14 de la Constitución Política, por ende, la comparación del texto que propone se encuentra en el cuadro 5.

(...) 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. **El Estado, y principalmente el Poder Ejecutivo, garantiza el acceso al internet, priorizando su cobertura en los sectores rurales, los que tienen mayor tasa de analfabetismo y de pobreza.**	**tiene derecho:** 25. De acceso a un internet de calidad, libre, inclusivo y abierto. El Estado garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. El uso de internet en las instituciones y universidades públicas es gratuito.	**tiene derecho:** 25. Al acceso de internet libre, abierto, y de alta calidad. El Estado garantiza su acceso universal e inclusivo.	25. Al acceso a internet libre, abierto e inclusivo. El Estado garantiza el acceso a internet de forma progresiva y universal para promover el desarrollo científico y tecnológico. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito.	25. A acceder a Internet. El Estado garantiza el acceso al internet y las tecnologías de la información y comunicación, promoviendo la alfabetización digital.".	4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos bajo las responsabilidades de ley. **El Estado garantiza el derecho de acceso a internet** Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. (...)	(...) 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. **El Estado garantiza el derecho de acceso a un internet libre y abierto.** Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. (...)

Fuente: Página web del Congreso de la República
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021

De estas 8 propuestas de ley, en 4 casos, se propone la modificación del artículo 14 de la Constitución Política. El siguiente cuadro muestra el comparativo de los textos propuestos.

Cuadro 4
Cuadro comparativo- Reforma Constitucional en el artículo 14, sobre el derecho de acceso a Internet[2]

1128/2021-CR	881/2021-CR	879/2020-CR	557/2020-CR
14-A.- El derecho al adecuado acceso al internet posibilita el logro de los derechos fundamentales, principalmente para la educación, la salud, el trabajo, las libertades informativas y el libre desarrollo de la personalidad. **Corresponde al Estado el deber de velar por la implementación progresiva de la infraestructura de telecomunicaciones por dicho fin y en todo el territorio nacional.**	**Artículo 14.-** La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. **El Estado reconoce el derecho al acceso al internet, las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y las zonas rurales del país.** **(...)**	**Artículo 14.-** La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. **Asimismo, promueve el acceso a internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.** (...)	**Artículo 14.-** La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. **Asimismo, promover el acceso a internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación.** La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. (...)

IV. MARCO NORMATIVO

1. Legislación nacional

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA

"***Artículo 3°.*** *- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza*

[2] Solo se consideran los proyectos de ley que proponen una reforma del artículo 14 de la Constitución Política. Incluye la incorporación del artículo 14-A.

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno."

b) LEY N° 29904, LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

*"**Artículo 1. Objeto de la Ley***
El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento."

2. Legislación y acuerdos internacionales sobre el acceso al internet

a) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS[3]
"Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."

b) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE NACIONES UNIDAS[4]
"Artículo 19
(...)
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda

[3] Visto en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf
[4] Visto en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
(...)"

c) **DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO**[5]

"Principio 10

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

d) **CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES**[6]

"ARTÍCULO 10

Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. (...)".

e) **DECLARACIÓN DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS**[7]

"III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza:
20. Decidimos también:

---

5 Visto en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2004/Ambiente_2004.nsf/5Documentosweb/19DB52A6B4B946FA05256F3C0057D095/$FILE/Declaraci%C3%B3n_de_Rio.pdf

6 Visto en: https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf

7 Visto en: https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf

• *Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social.*"

f) CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN[8]

"8. Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo."

g) CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue:

"60. En cuanto medio por el que puede ejercerse el derecho a la libertad de expresión, Internet solo puede responder a su finalidad si los Estados asumen su voluntad de elaborar políticas eficaces para obtener el acceso universal a Internet. A falta de políticas y planes de acción concretos, Internet pasará a ser un instrumento tecnológico al que solo podrá acceder una determinada élite, con lo cual se perpetuará la "brecha digital."[9]

h) AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución N° A/RES/70/299 aprobó la "Agenda de 2030 para el desarrollo Sostenible".[10] Uno de sus objetivos en el numeral 9.c se propuso "aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las telecomunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados para 2020".

---

8 Visto en: https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet-es.pdf

9 Visto en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf

10 Visto en: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf.

V. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS DE LEY

1. FUNDAMENTOS EN COMÚN DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS EXAMINADAS Y ORDEN DE ANÁLISIS PLANTEADO POR LA COMISIÒN

Habiéndose analizado los fundamentos de la exposición de motivos de las iniciativas legislativas en estudio, en los que se advierte los problemas que pretenden solucionar con una medida legislativa, observamos que comparten, entre ellas, las siguientes preocupaciones:

a. La Constitución no reconoce, expresamente, el acceso a internet como derecho fundamental de la persona.
b. Una muestra de las desigualdades existentes en el país es el acceso al internet, así como su baja velocidad, no teniendo todos los peruanos la posibilidad de usarlo libremente, y en igualdad de condiciones. Ello en virtud de la poca infraestructura invertida para promover su universalización.
c. La reforma constitucional planteada promueve el cierre de brechas de conectividad digital en el país, incrementando el acceso del internet en todo el territorio peruano, garantizándose que sea libre, abierto y neutral.
d. La medida optimiza diversos derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, tales como: derecho a la información, educación a la libertad de expresión y al derecho al trabajo, entre otros.

Asimismo, observamos que la propuesta de incorporar el derecho al acceso a internet en la Constitución Política origina las siguientes interrogantes:

- ¿Es el acceso al internet una herramienta importante para el desarrollo de una persona en el siglo XXI?
- ¿Es necesario incorporar el derecho al acceso a internet como un derecho fundamental a pesar que el artículo 3 señala que la enumeración de los derechos establecidos en la Constitución Política no excluye a otros derechos que se funden en la dignidad del hombre?
- ¿Qué otros derechos fundamentales de las personas se optimizarían si se incorpora en la Constitución Política el acceso a internet como un derecho?
- ¿Cuál sería la mejor fórmula legal para garantizar un acceso a internet, libre y abierto dentro de la Constitución Política?

En relación con todo ello, y a fin de realizar un mejor análisis, esta comisión considera pertinente desarrollar, en este orden, los siguientes ítems:

- Importancia del acceso a internet para el desarrollo de una persona en el siglo XXI.
- Acceso a internet como derecho fundamental y la necesidad de incorporarlo textualmente en la Constitución Política.
- Optimización inmediata de otros derechos fundamentales con la inclusión del acceso a internet en la Constitución Política del Perú.
- Propuesta de texto sustitutorio que propone la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

2. IMPORTANCIA DEL ACCESO A INTERNET PARA EL DESARROLLO DE UNA PERSONA EN EL SIGLO XXI

Hoy en día, el mundo se ha globalizado a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad, y ello se debe, en gran parte, al uso masivo del internet. Esta herramienta tecnológica permite una interconexión a gran escala, a nivel mundial, que trae como consecuencia una comunicación directa en tiempo real entre las personas, un intercambio de bienes y servicios online, acceso ilimitado a información disponible en la red de diferente tipo, educación virtual, uso de dinero virtual, entre otras.

Todo ello hace que el internet sea la tecnología decisiva de la era de la información, así como lo fue el motor eléctrico el vector de la transformación tecnológica durante la era industrial. Tal como refiere Castells, *esta red global de redes informáticas, que actualmente operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones inalámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de límites espaciales.*[11]

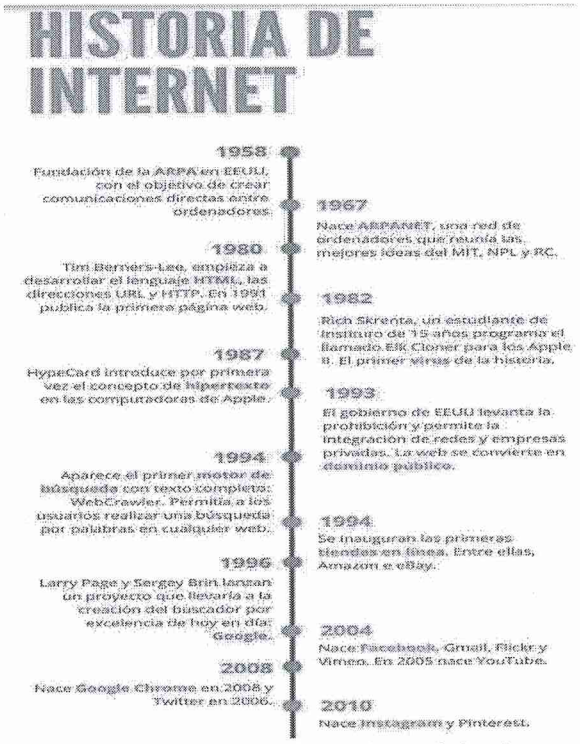
El internet ha tenido importantes momentos en la historia que promovieron su desarrollo y consolidación como herramienta tecnológica necesaria para el progreso de las sociedades modernas de hoy en día. A continuación, el detalle al respecto[12]:

---

[11] Manuel Castells, El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global, p. 9. Visto en: https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura Manuel-Castells-El-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global.pdf

[12] Visto en: https://www.iebschool.com/blog/historia-de-internet-innovacion/

Imagen 1

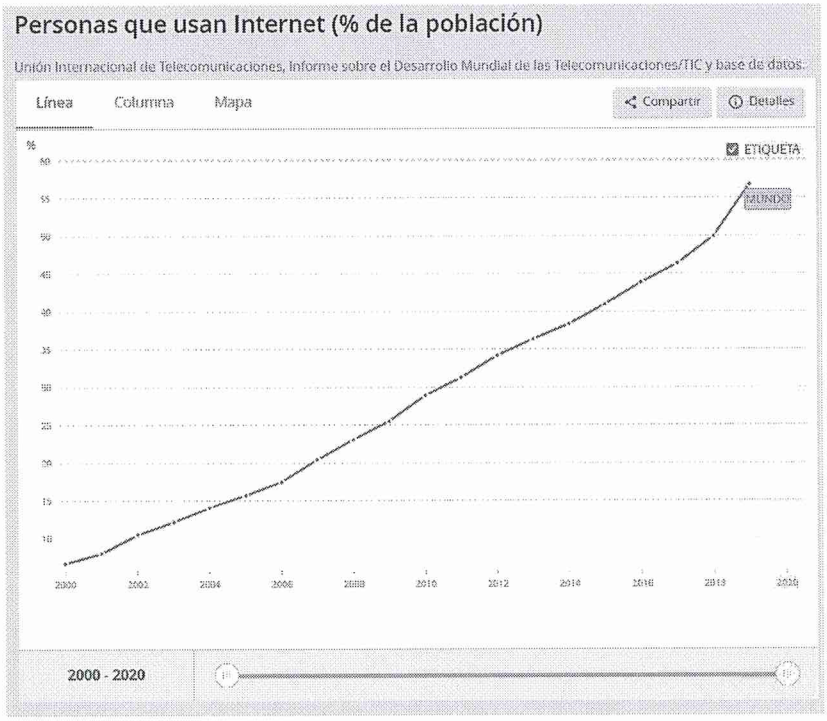


Fuente: Tomado de IE Business School

Ahora bien, según datos del Banco Mundial, el uso del internet ha tenido un crecimiento considerable desde inicios del siglo XXI. En el cuadro 4 se muestra que para el año 2000, solo el 6, 734% de la población mundial usaba internet, mientras que para el año 2019 se incrementó a 56,727%, denotando un crecimiento considerable y sostenible en el tiempo[13]. A continuación, el detalle:

[13] Visto en: https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2020&start=2000

Gráfico 1

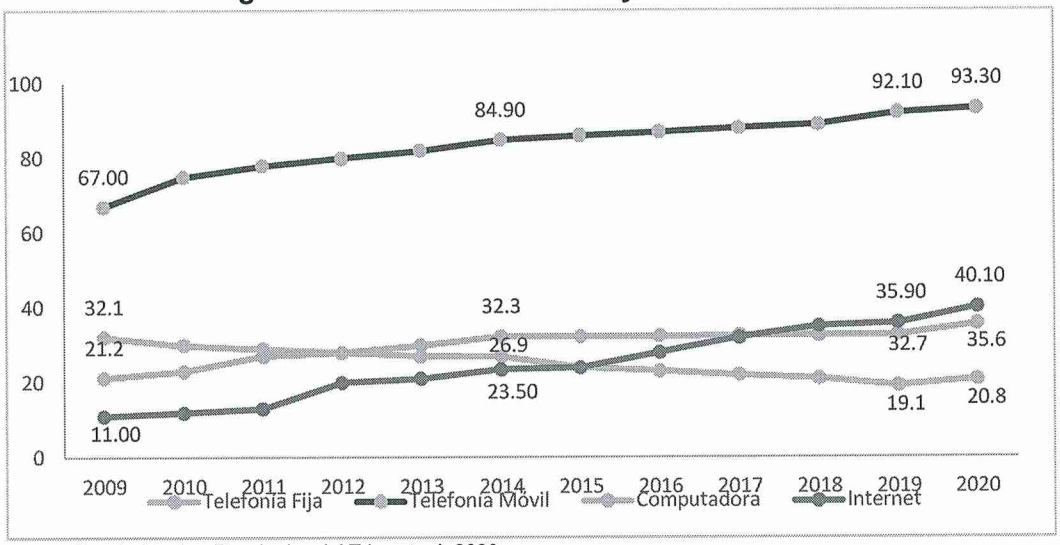


El uso del internet va de la mano con las Tecnologías de la información y la comunicación, o comúnmente llamadas "TIC", que son las herramientas que utilizamos para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como: teléfonos celulares, televisores, tablets, laptops, computadoras, etc.[14]

En relación con ello, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, dio a conocer en su informe técnico, que el teléfono móvil fue unos de las TIC más usados para el año 2020 en el territorio nacional. A continuación, el detalle al respecto:

[14] Visto en: https://www.ipp.edu.pe/blog/que-son-las-tic-y-para-que-sirven/

Gráfico 2
Hogares con acceso a servicios y bienes TIC en %



Fuente: Enaho. Resultados del Trimestre I, 2020
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento

Por otro lado, para el año 2020, en la etapa mas álgida de la pandemia de la COVID-19 en el territorio peruano, el internet tuvo un papel crucial para continuar con la educación de los escolares y estudiantes universitarios. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía[15] señaló lo siguiente:

- Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad se redujo cinco puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019, al pasar de 92% a 87%. Esto significa que más de cuatrocientos mil alumnos dejaron de plano de llevar clases durante el año 2020 a raíz de la pandemia. El mayor descenso ocurrió en el nivel de educación inicial, en el que la proporción de niños que recibieron clases cayó de 93% a 81%.

- Si bien los datos muestran que la reducción de la asistencia escolar fue un fenómeno generalizado para los alumnos de las familias de diferentes niveles

[15] Visto en: https://www.ipe.org.pe/portal/efectos-del-covid-19-en-la-educacion/

de ingresos, ello esconde la gran heterogeneidad entre la calidad de educación virtual recibida. En el quintil de ingresos más bajo –20% de hogares de menores ingresos–, los alumnos reportaron el uso de la radio para acceder a las clases a distancia en mucha mayor proporción (30%) que los alumnos pertenecientes al 20% de hogares con mayores ingresos (3%). Por el contrario, en el 20% de hogares de ingresos más altos, el 59% de los alumnos reportó haber empleado una plataforma virtual o página web, en contraste con solo el 17% del quintil de ingresos más bajo.

De lo expuesto, se evidencia la innegable existencia de brechas de desigualdad existentes en el país sobre el acceso a internet. Y es que, tal como se relata, los niños provenientes de los hogares de más bajos recursos usaron la radio para acceder a clases, mientras que los alumnos provenientes de hogares con mayores ingresos sí tuvieron acceso a plataformas virtuales para continuar sus clases.

Asimismo, es importante tener en cuenta que para el año 2021, sobre el acceso a internet en el territorio peruano, el INEI señaló que[16]:

- En el tercer trimestre del 2021, el acceso a Internet en los hogares del país alcanzó al 55,0%, aumentando en 9,6 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año 2020; de acuerdo con el informe técnico *Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares*, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
- Según área de residencia, los hogares con internet aumentaron en todos los ámbitos; produciéndose el mayor incremento en el resto urbano, al pasar de 47,7% a 59,0%; seguido del área rural, al aumentar de 11,4% a 20,7%; y Lima Metropolitana, de 64,2% a 72,0%.
- En el trimestre en mención, el 76,0% de la población de 6 y más años de edad a nivel nacional accedió a Internet; incrementándose en 5,6 puntos porcentuales al compararlo con igual trimestre del año 2020 (70,4%).
- Por área de residencia, la población usuaria de Internet en Lima Metropolitana alcanzó el 87,7%, en el resto urbano el 79,9%, y en el área rural el 48,0%.
- Según grupos etarios, en el trimestre en mención, de la población de 19 a 24 años de edad, el 93,6% accedió a Internet; de la población de 12 a 18 años de edad, el 92,9%; y de la población de 25 a 40 años de edad, el 85,8%. Asimismo,

[16] Visto en: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-550-de-los-hogares-del-pais-accedieron-a-internet-en-el-tercer-trimestre-del-2021-13269/

de las niñas y niños 6 a 11 años de edad, el 82,2% accedió al servicio; y del grupo de 60 y más años de edad, el 34,2%.

- En el trimestre julio-agosto-septiembre del año 2021, de la población usuaria de Internet de 6 y más años de edad, el 92,8% accedió a este servicio diariamente; el 6,7% lo hizo una vez a la semana; y el 0,5% una vez al mes o cada dos meses o más.
- En el tercer trimestre del año 2021, del total de la población usuaria de Internet, el 48,5% accedió a este servicio a través de un teléfono celular sin plan de datos, el 38,4% mediante un celular con plan de datos, el 17,9% por una laptop, el 14,6% por una computadora, el 4,2% por una tablet y el 9,1% por otro tipo de dispositivo como un televisor *smart*. En comparación con el mismo trimestre del 2020, se registraron incrementos porcentuales en los usuarios de Internet que acceden a través de laptop (3,3 puntos porcentuales), tablet (2,4 puntos porcentuales) y computadora (1,1 puntos porcentuales), entre los principales.
- Durante el trimestre señalado, en el 94,5% de los hogares del país existe al menos un miembro con teléfono celular. Según área de residencia, la mayor cobertura de este servicio se reportó en el resto urbano con el 97,1% y en Lima Metropolitana con el 96,4%, seguido del área rural con el 86,2%.

Bajo todo lo expuesto, esta comisión puede afirmar que el acceso a internet se ha tornado indispensable para el desarrollo de las sociedades modernas y de los propios individuos, quienes realizan diferentes actividades a través del internet en sus quehaceres diarios, a través de las TIC. Esto hace que el internet represente una herramienta tecnología que el Estado peruano necesariamente debe tener en cuenta como una política prioritaria para mejorar la calidad de vida de los miembros de su sociedad.

De igual modo, esta comisión afirma que en el periodo más álgido de la pandemia de la COVID-19, se identificó la existencia de brechas de desigualdad para acceder al uso de internet, afectando la educación de muchos niños y poniendo a debate la real importancia de garantizar un acceso a internet en beneficio de todos los peruanos, siendo ello materia del presente dictamen.

3. ACCESO A INTERNET COMO DERECHO SOCIAL Y ECONÓMICO, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE INCORPORARLO TEXTUALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La Constitución Política de 1993 desarrolla en su artículo 2 los derechos fundamentales de las personas. En este apartado se encuentran el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, libertades de información, opinión, expresión y difusión, entre otros. De igual forma, en el Capítulo II del Título I, de los derechos sociales y económicos del Texto Constitucional vigente, se reconoce como derechos de este tipo a la educación, salud, derecho de acceso al agua, entre otros. No encontrándose en ninguna parte de los acápites en mención el derecho al acceso al internet.

Y es que, para el año 1993 el internet no era masivo y necesario como lo es hoy en día; por ello, podría señalarse que el legislador de ese entonces no lo consideró como una prioridad para incluirlo en la lista de 24 incisos que engloba el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental o en los derechos sociales y económicos.

Sin embargo, cabe acotar que el artículo 3 del texto constitucional establece lo siguiente:

> *"**Artículo 3.** La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno."*

Ello, en palabras de Carlos Ernst, citado por Walter Gutiérrez Camacho en la obra "La Constitución Comentada. Análisis Artículo por Artículo", es denominado cláusula de los "derechos no enumerados", "derechos implícitos" o "derechos no escritos", teniendo todos ellos el mismo significado[17].

En la obra colectiva antes citada, el constitucionalista Edgar Carpio Marcos[18] menciona lo siguiente sobre el artículo 3 del texto constitucional vigente:

[17] GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. "La Constitución Comentada "Análisis Artículo por Artículo". Fondo Editorial Gaceta Jurídica, tercera edición, Lima - Perú, 2015, p.493.

[18] Idem

- La expresión "derechos humanos de naturaleza análoga", hace referencia a derechos de naturaleza "equivalente", "aproximada", "parecida", "similar" o "correlativa", que no forman parte del contenido protegido por un derecho expresamente garantizado por la Constitución, pero que, teniendo un contenido protegido propio, se encuentran relacionados con uno que la Norma Suprema sí reconoce. Un ejemplo de ello es el derecho de replica ante determinado ejercicio de la libertad de expresión, en forma análoga a la función que cumple el derecho de rectificación en relación con cierto ejercicio de la libertad de información.
- Tal vinculación o ligamen de un derecho con uno ya reconocido expresamente en la Constitución, trae como consecuencia de que se le pueda dispensar similar rango; no obstante, para su protección tiene la virtualidad de excepcionar al operador judicial de fundarlo o justificarlo sobre la base de cualquiera de los principios supremos que el mismo artículo 3 proclama.
- Cabe comprender que la apelación al artículo 3 de la Constitución Política que hace el Tribunal Constitucional es, en algunas ocasiones, a efectos de dotar de una protección constitucional a derechos como a ser juzgado dentro de un proceso que dure un plazo razonable; a no ser sancionado ni juzgado dos veces por un mismo hecho, el derecho a los medios de prueba; a ser juzgado por un juez imparcial; a la efectividad de las resoluciones judiciales, etc. Todos estos derechos se podrían decir que son "derechos implícitos" de derechos expresos, también podría lícitamente pensarse que se trata de derechos "análogos" a otros de naturaleza constitucional procesal expresamente reconocidos por la Constitución, como pueden ser los derechos de defensa, pluralidad de instancias, a la presunción de inocencia, etc.
- Asimismo, y fuera de los supuestos de identificación de derechos constitucionales implícitos *per relationem* con derechos expresos, el artículo 3 de la Constitución deja en manos de los intérpretes jurisdiccionales de la Constitución la individualización e identificación de otros atributos esenciales de la persona, con el mismo rango constitucional de los que aparecen garantizados expresamente a partir de tres principios constitucionales de muy diversa naturaleza: el principio de dignidad de la persona, los de Estado Democrático de Derecho y la forma republicana de gobierno.

En esa misma línea de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado que el artículo 3 de la Constitución Política dispone que la enumeración de los derechos constitucionales no es exhaustiva (*numerus clausus*), sino que existe a ese nivel un *numerus apertus*. Esto implica que la enumeración de los derechos establecidos en el Capítulo I de la Constitución Política no excluye a los demás que la Constitución

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía de pueblo, del estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Así, el artículo 3 de la Constitución prevé la individualización de "nuevos" derechos, en función de la aplicación de la teoría de los "derechos innominados".[19].

En adición a ello, el Tribunal Constitucional señala en la resolución recaída en el expediente 00895-2001-AA/TC, lo siguiente:

> *"5. (...) Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de "desarrollo de los derechos fundamentales", cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución.*
> (...)
> *Nuestra Constitución Política recoge en su artículo 3° una "enumeración abierta" de derechos, lo cual no obsta para pensar que en ciertos derechos constitucionales explícitamente reconocidos, subyacen manifestaciones del derecho que antaño no habían sido consideradas. El Tribunal Constitucional considera que, en la medida en que sea razonablemente posible, debe encontrarse en el desarrollo de los derechos constitucionales expresamente reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar el respeto a la dignidad del hombre, puesto que ello impediría la tendencia a recurrir constantemente a la cláusula constitucional de los derechos "no enumerados" y, con ello, desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La apelación al artículo 3° de la Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse*

[19] Expediente 0008-2003-AI/TC, fundamento 32.

que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita."[20] *(el subrayado es nuestro)*

Bajo lo expuesto, esta comisión considera que el artículo 3 de la Constitución Política es una cláusula abierta que permite garantizar y proteger los derechos no mencionados en la Constitución Política, los derechos implícitos relacionados a aquellos ya expresamente señalados en nuestra Carta Magna, así como de aquellos nuevos derechos que pueden aparecer, estando estos estrechamente relacionados a los principios constitucionales de dignidad de la persona, los del Estado Democrático de Derecho y la forma Republicana de Gobierno.

Asimismo, esta comisión es de la opinión que es razonable encontrar en la Constitución Política los derechos fundamentales que permiten consolidar el respeto de la dignidad del hombre. Y es que, de acuerdo con el artículo 1 del propio Texto Constitucional, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano, siendo coherente que el artículo 3 del texto constitucional prevea los derechos de naturaleza implícita o análoga, o de aquellos que podrían surgir en un futuro, permitiendo que estos últimos tengan un marco jurídico constitucional idóneo para su desarrollo.

Ahora bien, cabe la siguiente pregunta, *¿Sería necesario, entones, incluir el derecho al acceso a internet de manera explícita en la Constitución Política, si está ya podría estar considerada de forma implícita en el artículo 3 del texto constitucional?*

Desde la Comisión de Constitución y Reglamento creemos que sí, pues mientras que los derechos implícitos se sujetan a interpretaciones o pueden ser entendidos como derechos no declarados; lo explícito no deja duda alguna de que el Estado quiere darle la relevancia e impulso más efectivo o directo al reconocimiento, ejercicio y disfrute del derecho que quiera expresar taxativamente en el texto constitucional.

En ese sentido, siendo que solo a partir de garantizar el acceso a internet es posible que las personas puedan ejercer de manera efectiva y oportuna de todos sus derechos fundamentales, como son a la libertad de información, expresión, de educación, trabajo y hasta de salud, entre otros; el Estado debe demostrar, expresamente que es una de sus mayores prioridades, el fomentar que todos tengan

20 Expediente 00895-2001-AA/TC, fundamento 5.

la misma oportunidad de acceder a internet ya que se trata no de un lujo, sino de una necesidad de la persona del sigo XIX, sin la cual no es posible el pleno ejercicio de sus derechos.

Por ello, consideramos que el derecho de acceso al internet no puede estar oculto o presumido como en el contenido del artículo 3 del texto constitucional vigente, sino, por el contrario, debe estar desarrollado en la propia Constitución Política, con el fin de asegurar una política que fomente y priorice su real acceso a todos los peruanos, que obligue al propio Estado a satisfacer este servicio, que se ha convertido hoy en día, repetimos, en una necesidad básica para el buen desarrollo del todo ser humano.

Es por ello, que esta comisión, con el fin de implementar correctamente el acceso al internet a todos los peruanos, propone que este derecho reconocido implícitamente en el artículo 3 de la Constitución Política, a incorporarse expresamente en el texto constitucional vigente, con el fin de establecer en la ley de leyes una garantía pétrea y plena, sobre el acceso al internet para todos los peruanos.

Asimismo, consideramos que el Estado, para asegurar el acceso universal a este derecho, requerirá de inversión pública o privada, para que el internet llegue a cada rincón del país. El fundamento respecto a que el internet sea promovido a través de la inversión pública o privada se basa en que el Estado peruano debe garantizar los servicios mínimos que permitan el desarrollo de las personas en sociedad. En ese sentido, el Estado debe acompañarse del empresariado para lograr este fin, y en los supuestos que este no desee invertir, será el Estado quien, de manera subsidiaría, invertirá para que los ciudadanos, y sobre todo las poblaciones vulnerables y localidades alejadas puedan tener acceso al internet.

De igual forma, esta comisión basa también su propuesta de acceso al internet a través de la inversión privada o pública en los pronunciamientos tomados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[21], en su 32° período de sesiones, en el cual:

- Exhortan a todos los Estados a que promuevan y faciliten la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los

[21] Visto en: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf

servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los países.

- Afirman que la calidad de la educación cumple un papel decisivo en el desarrollo y, por consiguiente, exhorta a todos los Estados a fomentar la alfabetización digital y a facilitar el acceso a la información en Internet, que puede ser una herramienta importante para facilitar la promoción del derecho a la educación.
- Afirman también la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital.
- Exhortan a todos los Estados a que acaben con la brecha digital entre los géneros y mejoren el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
- Exhorta a todos los Estados a abordar las preocupaciones relativas a la seguridad en Internet de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, para garantizar la protección de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad y otros derechos humanos en Internet, entre otras cosas mediante instituciones nacionales democráticas y transparentes basadas en el estado de derecho, de forma tal que se asegure la libertad y la seguridad en la red para que pueda seguir siendo un motor enérgico del desarrollo económico, social y cultural.
- Exhortan a todos los Estados a que consideren la posibilidad de formular, mediante procesos transparentes e inclusivos con la participación de todos los interesados, y adoptar políticas públicas nacionales relativas a Internet que tengan como objetivo básico el acceso y disfrute universal de los derechos humanos.

Por estas legítimas razones, y teniendo en cuenta que el Estado Peruano es parte de las Naciones Unidas, esta comisión considera necesario que el aparato estatal promueva, a través de la inversión pública o privada, la conectividad del internet a todos los peruanos.

Lo expresado coincide con la opinión favorable recibida de la oficina de TIC del MINEDU, que considera fundamental y oportuno el impulsar la accesibilidad del servicio de internet con el fin de cerrar la brecha digital y, por ende, impulsar, desde el Estado, la conectividad, el derecho a navegar con una banda ancha adecuada

que cautele los principios orientadores del acceso a internet: la accesibilidad, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad.

De aprobarse las iniciativas legislativas examinadas, se optimizaría también el impulso de la Agenda Digital Peruana 2.0[22], que es la política pública que entiende a las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un instrumento en la búsqueda de un desarrollo humano más equitativo y sostenible que haga posible un mayor crecimiento económico, el logro de mejores empleos y un aumento de la competitividad, inductora de la inclusión social.

De igual manera, se promovería el cumplimiento del objetivo estratégico N° 2 de la Agenda Digital Peruana 2.0, referido a integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y la participación de la población en la sociedad de la información y del conocimiento.

En adición a ello, esta comisión considera pertinente citar lo dicho por el Tribunal Constitucional, que en su resolución recaida en el expediente N° 02-2001-AI/TC[23], reconoció la importancia de internet como derecho habilitador de otros derechos fundamentales:

> *"La circunstancia que determinará que el ciudadano pueda incluirse dentro de uno u otro sector es, fundamentalmente, al margen de otros factores aleatorios, su condición o posibilidad económica y, además cultural, en el caso del acceso a internet; económica, en tanto el acceso a dichos medios (televisión por cable e internet) supone el pago de servicios cuyas tarifas no están precisamente al alcance de la capacidad económica de la totalidad de la población; cultural, porque el acceso a internet exige un mínimo de aprestamiento técnico o capacitación del que carecen aún grandes sectores de la población peruana, teniendo en cuenta a tal efecto el predominante "analfabetismo informático" del que ésta aún padece. Planteado en estos términos, el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada (el derecho a la información) se ve condicionado por el acceso (o no) a determinados medios de comunicación (internet y televisión por cable), lo cual, a su vez, estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de cada persona."* (El subrayado es nuestro).

En ese mismo orden de ideas, esta comisión también considera que la aprobación del presente dictamen traería como consecuencia el fortalecimiento de otros

22 Visto en: https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/tic/documentos/agendadigital20.pdf
23 Visto en: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00002-2001-AI.html

derechos fundamentales como la educación, derecho a la comunicación, acceso a la información entre otros, tal como se explicará en el siguiente acápite.

Por estos motivos, esta comisión afirma que el reconocimiento del derecho al acceso a internet dentro de la Constitución política es válido. No obstante, también es menester de este colegiado indicar en qué parte del Texto Constitucional tendría que ser adherido. Para ello, esta comisión considera que el derecho de acceso al internet debe ser insertado en el Capítulo II del Título I de la persona y de la sociedad, referente a los derechos sociales y económicos. Y es que nos encontramos ante un derecho que es parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o también conocido por su abreviatura como "DESCA".

Sobre los DESCA la organización de los Estados Americanos[24] ha mencionado lo siguiente:

- Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están previstos tanto en la Declaración Americana, en sus artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, de manera general en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, con mayor detalle, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Protocolo de San Salvador).
- La Carta promueve un marco institucional para que estos temas sean abordados desde una perspectiva integral. Es por eso que, en primer lugar, se establece que los seres humanos tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual, entre otras disposiciones relacionadas al Derecho al Trabajo y a la Educación. De igual manera, mediante el Protocolo de Buenos Aires, la Carta de la OEA incorpora, en el artículo 34, las medidas que proporcionen las metas básicas para el desarrollo integral, incluyendo condiciones de trabajo aceptables para todos, ampliación de las oportunidades en el campo de la educación, vivienda adecuada, entre otros.
- Al igual que en la Carta de la OEA, la Declaración Americana no hace distinción entre los derechos que están enumerados en su texto. Están presentes en la Declaración los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos civiles y políticos, apuntando que en el Sistema Interamericano todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Por su parte, la Carta Democrática Interamericana (2001) resalta la

[24] Visto en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio%20DESCA_ESP_completo.pdf

importancia de que los DESCA sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos. En la misma línea, la Carta Social de las Américas (2012) sostiene que la "promoción y observancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del hemisferio".

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos considera en su preámbulo la incorporación a la Carta de la OEA de "normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales" y que se "determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia". **La Convención tiene un compromiso general hacia la implementación y protección de los DESCA a través de su artículo 26, el cual se orienta a lograr progresivamente "la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados"**.

De lo citado, esta comisión puede afirmar que los DESCA son derechos que están en constante desarrollo, pues al permitir integrar al individuo en la sociedad, éstos responden a las nuevas realidades que se suscitan, con el fin de que se atiendan necesidades básicas para el desarrollo humano, garantizando la plena efectividad de los derechos derivados de las normas económicas, sociales, de educación, ciencia y cultura, basado en los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, es correcto afirmar que el acceso al internet, por sus notables y destacados efectos para el desarrollo personal de una persona, se ha convertido en un derecho sustancial para el mejoramiento de la calidad de vida del individuo en las sociedades modernas del siglo XXI.

Por estos fundamentos, esta comisión considera que la incorporación del derecho al acceso al internet debe ir en el Capítulo II del Título I de la persona y de la sociedad, referente a los derechos sociales y económicos. Ahora, si bien es cierto que varias iniciativas legislativas señalan que debería incorporarse en el artículo 2 de la Constitución Política, esta comisión no considera correcto ello, en virtud de que los derechos expresados en el artículo dos son derechos que han tenido un proceso histórico para su inserción en nuestra Carta Magna, muchos de ellos

mencionados como parte de los derechos de primera generación[25], lo cual no ocurre con el derecho al acceso al internet, por ser un derecho que se ha consolidado en el siglo XXI.

No obstante, esta comisión cree conveniente, bajo los fundamentos anteriormente expuesto que acreditan la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, que deben éstos incluirse en el numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer su uso en todo el territorio peruano, optimizando libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.

4. OPTIMIZACIÓN INMEDIATA DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES CON LA INCLUSIÓN DEL ACCESO A INTERNET EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

Por los propios beneficios que trae consigo el internet, diferentes derechos fundamentales expresamente contenidos en la Constitución Política serían optimizados y fortalecidos. A continuación, el detalle de algunos de ellos:

Derecho a la educación: de acuerdo con la opinión vertida por el Ministerio de Educación sobre el Proyecto de Ley 557/2021-CR, se fortalecería el cumplimiento del Currículo Nacional de la Educación Básica -CNEB, en virtud de que se garantizaría el aprendizaje de perfil de egreso respecto: "El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje.".

De igual modo, se sostiene que se fortalecería la competencia transversal en entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y ética. Ello implicaría que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales, promoviendo capacidades como la personalización de entornos virtuales, la gestión de información del entorno virtual, la interacción en entornos virtuales y la creación de objetos virtuales en diversos formatos.

---

[25] **Derechos de Primera Generación:** Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos Derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente.
Visto en: https://derechoshumanosysusgarantas.wordpress.com/2015/05/28/primera-generacion-de-los-derechos-humanos/

Además, en la opinión vertida, con la cual esta comisión concuerda, se señala que se garantizaría el desarrollo de infraestructura tecnológica y sobre todo de redes de comunicación que garanticen el acceso a internet para toda aquella persona que quiera hacer uso, en especial en las zonas rurales, zonas de frontera y comunidades indígenas, y se extenderá su uso en aquellas zonas de difícil acceso, para reducir las brechas de equidad y de conectividad, lo cual es concordante con la Política General de Gobierno en lo que respecta al Sector Educación.

Todo ello, permitiría que, en situaciones como la vivida durante la pandemia de la COVID-19, se garantice una educación en línea para todos, en igualdad de condiciones, y sin discriminación alguna.

Libertad de expresión, opinión e información: de acuerdo con la opinión vertida por la Defensoría del Pueblo sobre los Proyectos de Ley 557/2021CR, 879/2021-CR y 881/2021-CR, el internet es una herramienta esencial para poder expresar y/o canalizar ideas, pensamientos, críticas, hechos noticiosos, así como para acceder a opiniones e información de toda índole. Esta opinión también cita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), que ha mencionado: "en la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en amplios sectores de la población".

En ese orden de ideas, esta comisión afirma que el internet permite acceder a todo tipo de información y espacios de dialogo o debate público sobre materias de interés general, siendo una vía alterna a los medios de comunicación tradicional como la televisión, imprenta o radio que pueden ser controlados por grupos privados o, en ciertos regímenes dictatoriales, por el propio sector público. En ese sentido, el internet promueve y protege el derecho a la libertad de opinión, optimizándolo y permitiendo que un individuo pueda manifestar su propia posición en la red sin necesidad de incurrir en altos gastos como sí tendría que asumir si lo hace por medios de comunicación tradicionales.

Sobre la libertad de expresión, se puede decir que es una herramienta esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, tales como la libertad religiosa, la educación, la identidad étnica o cultural y el de igualdad. Asimismo, la transmisión de ideas y pensamientos a través de la historia ha significado el desarrollo de las

naciones, debido a la posibilidad de aprender, analizar y comparar, las cuales son necesarias para la toma de decisiones.

Por su parte, la Corte IDH, en su sentencia en el caso *Kimel vs. Argentina*[26], ha explicado las dos dimensiones de la libertad de expresión:

> "*53. Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.*" (El subrayado es nuestro).

Según esta resolución, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para su comunicación entre sí, limitando al mismo tiempo al Estado para que no interfiera o restrinja los medios o el canal de dicha comunicación. Por ello, la accesibilidad a internet no sólo se vuelve una obligación ineludible para el Estado, sino que también es la pieza fundamental en la garantía de los derechos humanos de las personas inspiradas en la dignidad del ser humano, de ahí que cualquier violación por acción, omisión o tolerancia debe ser reparada integralmente.[27]

Derecho al trabajo: el acceso a internet en el territorio nacional garantizaría la promoción de trabajo remoto en el país, abriendo la posibilidad que todo ciudadano pueda optar, en cualquier lugar que se encuentre, a un empleo remoto, mejorando la calidad de vida del ciudadano, así como su dignidad. Esto en virtud de que la persona no afrontaría las externalidades negativas de ir al trabajo, tales como el tráfico, inseguridad ciudadana y estar expuesto a contagiarse de un virus que puede ser desde una común gripe, hasta la COVID.19.

---

[26] Visto en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
[27] José Alfredo Gómez Reyes, Derecho humano al acceso a internet, Revista de Ciencias Jurídicas Exégesis, Marzo 2019 – Tomo 60, p. 193.

Una breve muestra de lo que se sustenta es los momentos que vivió el país durante la crisis sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19. En ese escenario se promovió una forma de trabajo desde el hogar, mejorando la calidad de vida de las personas, quienes no solo protegían su salud desde casa, sino que también evitaban exponerse a otros peligros que afronta nuestra sociedad, como la delincuencia, tráfico, contaminación sonora, etc.

A mayor abundamiento, la Comisión considera conveniente recoger lo expuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en la Sentencia 12790 recaída en el expediente 09-013141-0007-CO:

> *[D]ebe decirse que el avance en los últimos veinte años en materia de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) ha revolucionado el entorno social del ser humano. Sin temor a equívocos, puede afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el ser humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo. En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho de acceso a la Internet o red de redes.[28] [...]*
>
> *En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías.* (el subrayado es nuestro)

Así, se puede afirmar que el reconocimiento del derecho al acceso a internet fortalecería los derechos de educación, libertad de opinión, expresión e información, así como derecho al trabajo; siendo de vital importancia su adhesión a la Constitución Política del Perú.

---

[28]Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica (2010). Sentencia 12790 recaída en el expediente 09-013141-0007-CO.

Por lo tanto, esta comisión, luego de un análisis hecho, y encontrando justificada la necesidad de reconocer en la Constitución Política el acceso a internet como un derecho, propone, como texto sustitutorio, modificar los artículos 2 y 14 del texto constitucional, de acuerdo con el siguiente sustento:

Modificación al artículo 2 inciso 4

> Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
> (...)
> 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos bajo las responsabilidades de ley.
>
> **El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país.**
>
> Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. (...)

Fundamento:

Esta comisión considera relevante modificar el numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política, toda vez que en ella se desarrolla las libertades de información, expresión y difusión, adhiriendo un párrafo que promueva el uso de las TIC en todo el territorio nacional. Ello en razón a que, tal como se ha explicado en el dictamen, las TIC han generado un impacto positivo en la forma de vida de las personas, optimizando las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, mencionadas en ese apartado del texto constitucional.

Cabe señalar, que las TIC, según la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, simplifican el flujo de comunicación, permiten una interacción en tiempo real, así como facilitan el acceso y difusión de todo tipo de información e ideas. En ese sentido, es coherente que el Estado garantice y promueva su uso, con el fin de amplificar las libertades que son mencionadas en el numeral 4 del artículo 2 de nuestra carta magna, por esta relacionado con su contenido.

Esta modificación evitaría que posibles gobiernos dictatoriales puedan censurar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento de los ciudadanos, toda vez que la ciudadanía tendrá el derecho constitucional de expresarse a través de las TIC; contribuyendo esta medida en el fortalecimiento y sostenibilidad de la democracia de manera directa.

Incorporación del artículo 14-A

Por otro lado, esta comisión plantea incorporar el artículo 14-A a la Constitución Política, conforme al siguiente texto:

> **"Artículo 14-A. El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas."**

Fundamento

Al hacer referencia a un internet libre, la Comisión pretende no solo reconocer el acceso al internet como un derecho, sino que, al considerarlo como tal, se puede decir que este no puede ser objeto de censuras o restricciones, salvo cuando éstas *se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros*, siguiendo el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país en 1978. En ese sentido, la Comisión, siguiendo a Souter y Van der Spuy considera que un internet es libre cuando respeta los derechos humanos enunciados en los acuerdos internacionales y cuando permite que las personas los disfrutan y ejerzan plenamente.[29] Por ello, no considera compatible con el reconocimiento de este derecho la existencia de censuras o filtros abusivos, pues afectaría las libertades de información y expresión.

Con las modificaciones expuestas, se garantizará y promoverá el uso de todas las TIC, así como del Internet, para optimizar diferentes derechos concebidos en la Constitución Política del Perú.

[29] Souter, David y Van der Supu, Anri (2019). *Indicadores de la UNESCO sobre la universalidad de Internet: marco para la evaluación del desarrollo de Internet.* UNESCO

Para viabilizar ello, se propone una obligación constitucional al Estado, para que, a través de inversión pública o privada, pueda garantizar el acceso al internet en todo el territorio nacional. Como esta comisión ya indicó con anterioridad, esta propuesta nace con el fin que el Estado peruano garantice los servicios mínimos que viabilicen el desarrollo de las personas en sociedad. Asimismo, se propone inversión privada por ser esta dinámica, ágil para responder a las necesidades del mercado, no ocasionando gasto público, así como una inversión pública, pues en ciertos escenarios el empresariado no desearía participar por no obtener ganancia, correspondiendo al Estado, de manera subsidiaría, invertir para que las poblaciones vulnerables y en localidades alejadas puedan tener acceso al internet.

VI. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

La propuesta normativa presentada por la Comisión de Constitución y Reglamento modifica el numeral 4 del artículo 2 e incorpora el artículo 14 A, en la Constitución Política. Ello implica la emisión de una norma de reforma constitucional por parte del Congreso de la República, la cual tendrá efectos al día siguiente de su publicación.

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Los beneficios del texto normativo que se propone aprobar se muestran en el siguiente cuadro:

SUJETOS	BENEFICIOS
El Estado en general	• Al garantizar la inversión pública y privada para asegurar el uso del internet en toda la población, así como fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación de manera equitativa entre la población, se lograr, de forma progresiva, eliminar o reducir las brechas de interconectividad existentes, otorgando, así mayores condiciones de igualdad entre todos, y, sobre todo, sobre todo en las poblaciones que más necesitan atención de parte del Estado.
La ciudadanía en general	• Contaría con mayores posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías a partir de las cuales podrá ejercer de mejor manera sus libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como gozar de forma más integral, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, entre otros.

	• De ser aprobada la reforma constitucional en el sentido propuesto, se garantizaría que el Estado va a fomentar, a través de a inversión pública y privada, que toda la población tenga acceso a un internet libre, fortaleciendo, así, el pleno ejercicio de derechos fundamentales como: educación, trabajo, libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, entre otros.

Entre los costos de la propuesta de ley podemos mencionar los siguientes elementos:

SUJETOS	COSTOS
El Estado en general	De ser aprobada la reforma constitucional en el sentido propuesto, se generarán deberes estatales en varios niveles, como por ejemplo el deber del Congreso de la República de legislar la normativa de desarrollo; el deber del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ajustar las normas vigentes y/o modificar las normas especializadas para la mejor aplicación de la norma, así como garantizar el acceso del internet en todo el territorio nacional. Al tener que priorizarse la inversión pública y privada en el acceso a los servicios de internet, por efecto, otros rubros de inversión podrían dejar de ser prioritarios.

VIII. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal b del Artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de los proyectos de ley 557, 879, 881, 1128, 1197, 1215, 1397 y 1736/2021-CR con el siguiente texto sustitutorio:

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROMUEVE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET LIBRE EN TODO EL PAIS

Artículo 1. Modificación del numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política
Se modifica el numeral 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, de acuerdo con el siguiente texto:

"**Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:**

[...]

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos bajo las responsabilidades de ley.

El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todo el país.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
[...]"

Artículo 2. Incorporación del artículo 14-A a la Constitución Política del Perú
Se incorpora el artículo 14-A a la Constitución Política del Perú, de acuerdo con el siguiente texto:

> **"Artículo 14-A. El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas."**

Sala Virtual de Sesiones
Lima, 7 de junio de 2022

CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
Presidenta
Comisión de Constitución y Reglamento

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JOSE LUIS ELIAS AVALOS
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2022 12:11:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2022 16:18:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2022 13:44:07-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2022 15:38:40-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 557, 879, 881, 1128, 1197, 1215, 1397 Y 1736/2021-CR, LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROMUEVE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET LIBRE

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/06/2022 17:13:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CUTIPA CCAMA Victor Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 17:24:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: REYMUNDO MERCADO Edgard Cornelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/06/2022 11:02:21-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2022 16:25:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2022 14:32:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/06/2022 09:50:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 11:40:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 10:59:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUITO SARMIENTO Bernardo Jaime FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 11:52:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BALCAZAR ZELADA Jose Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 13:12:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2022 13:47:11-0500

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: miércoles, 15 de junio de 2022 11:51
Para: raespinoza@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: b420995447927b622f32c118ae16b054.pdf

[Solicitante]: raespinoza@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: Se adjunta DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 557, 879, 881, 1128, 1197, 1215, 1397 Y 1736/2021-CR, LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROMUEVE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO A INTERNET LIBRE, aprobado en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 07 de junio de 2022, en la cual se acordó la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar lo acordado. Por favor, considerar esta última versión del dictamen, con la firma del congresista Reymundo Mercado
[Fecha]: 2022-06-15 11:50:40
[IP]: 94.188.207.216

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.